

Llevaba toda su vida sin revisar las tuberías de vapor principal de las turbinas, hasta que el pasado 9 de agosto una de ellas reventó y el vapor de agua a alta temperatura que se liberó mató a 5 trabajadores e hirió gravemente a otros 6. En efecto, veintiocho años, desde que comenzó a funcionar en 1976, es lo que llevaba la central nuclear japonesa de Mihama-3 sin revisar componentes, como esas tuberías, cuya integridad es básica para evitar situaciones de accidente, como el que finalmente se produjo. Tuberías que originalmente tenían 10 mm. de espesor y, tras 28 años de desgaste, se habían quedado en tan sólo 1,4 mm. La rotura de esa tubería conllevó la pérdida del 70% del agua de refrigeración del circuito secundario, lo que generó un escenario de accidente grave, del que afortunadamente, esta vez, nos libramos.

El lector pensará ¿cómo es posible que en una central nuclear no se revisen nunca sistemas tan importantes como esos? La respuesta es así de simple: por recortar gastos, aún cuando esto se haga a costa de la seguridad. De hecho, la policía nipona, que inició una investigación al respecto del accidente en Mihama-3, pudo comprobar que la compañía propietaria, Kansai Electric Power Co. (KEPCO), tenía ya claros y precisos avisos de que el material de la tubería estaba degradado por problemas de corrosión y corría riesgo de romperse, pero que prefirió hacer caso omiso de ello y no realizar una inspección en profundidad, por reducir costes de operación. Por ello, la policía considera que KEPCO puede ser responsable de negligencia con resultado de muerte.

Lamentablemente, situaciones como esta y otras de parecida naturaleza son en realidad muy frecuentes, y cada vez lo son más. Es una de las consecuencias que tiene el que la energía nuclear sea una energía cara y económicamente no competitiva.

La energía nuclear sólo ha sido capaz de sobrevivir en los países donde ha contado -o cuenta aún- con fuertes subsidios estatales. Pero, cuando el escenario cambia y se acaban los subsidios públicos, la reacción automática de la industria es la reducción de costes y ésta es con harta frecuencia a costa de la seguridad de las instalaciones con, por ello, de la seguridad del público y del medio ambiente. Lo acaecido en Mihama-3 es tan sólo el ejemplo más reciente.

En España la industria nuclear también ha venido disfrutando durante décadas de un inaceptable trato de favor por parte de los sucesivos gobiernos. En primer lugar, se han trasladado a la tarifa eléctrica (que pagamos los ciudadanos) todas las ineficiencias económicas de la energía nuclear: desde el coste de la minería del uranio hasta el de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones. El coste de la gestión de estos residuos, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos será de cerca de 10.000 M€ (y a pesar de estos datos, ¡¡todavía hay quien se atreve a decir que la industria nuclear es competitiva!!).

Pero las facilidades no acaban ahí. El marco regulatorio del sector eléctrico vigente con anterioridad a la liberalización del sector, que fue denominado Marco Legal Estable, era un sistema basado en el reconocimiento de costes. Es decir, las compañías podían trasladar a la tarifa eléctrica, prácticamente todos los costes en los que incurrieran en sus instalaciones, incluidos los de construcción y los de mantenimiento de las mismas.

Sin embargo, siguiendo la tendencia internacional en el mundo occidental, a finales de los años 90, el escenario cambió. Así, a partir de la liberalización del sector eléctrico en España (que puso fin al sistema de reconocimiento de costes) las inversiones de las compañías eléctricas en mantenimiento y mejora de sus instalaciones nucleares han caído drásticamente. De acuerdo a datos de UNESA, la patronal eléctrica, de los 341 millones de euros gastados en 1996 para mejora de la seguridad, se pasó a 128 M€ en 2001, un 62% menos que antes de la liberalización. Este descenso del nivel de inversiones en mantenimiento va además frecuentemente en paralelo a una disminución de la plantilla de las centrales nucleares y otras medidas de reducción de costes de personal, lo que agrava aún más la situación.

Para poder rebajar gastos a costa de la seguridad sin sufrir sanciones o cierres, en suma, para operar las centrales nucleares

con el mínimo coste posible aunque éstas estén plagadas de graves problemas de seguridad, a la industria nuclear le resulta indispensable conseguir la connivencia de los organismos reguladores en materia de seguridad nuclear.

En España, sin duda, lo ha logrado, y así, en los últimos años, hemos presenciado como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha facilitado la vida a los titulares de centrales nucleares otorgándoles una incesante cascada de exenciones al cumplimiento de sus propias normas de seguridad, llevando a cabo una sistemática relajación de la normativa de seguridad, dando presencia creciente dentro del CSN a la industria nuclear y a sus empresas de ingeniería para llevar a cabo trabajos técnicos, como los análisis probabilísticos de riesgo de sus propias centrales nucleares. En suma, la evidencia de la claudicación del CSN ante la industria nuclear.

Sólo así, gracias a esa connivencia entre el regulador y el regulado, se explica por ejemplo que la central nuclear de Garoña (Burgos) siga en funcionamiento a pesar de sufrir graves problemas de seguridad. Los últimos datos oficiales del CSN disponibles sobre esta central, cuya vida operativa se inició allá por 1971, demuestran que el estado de la vasija de Garoña ha empeorado de forma significativa en los últimos años, y sugieren que su vida útil está ya agotada, por lo que Greenpeace considera que lo más prudente sería proceder a su cierre inmediato y definitivo.

Esta central sufre, entre otros problemas de importancia, un problema de agrietamiento por corrosión en los tubos (llamados penetraciones) que atraviesan la vasija del reactor (donde se aloja el combustible de uranio) y a través de los cuales deben introducirse a su interior las barras de control (cuya función es la de parar la reacción nuclear que tiene lugar en el núcleo de uranio). La integridad estructural de estos tubos de la vasija es de fundamental importancia para la seguridad ya que las barras de control deben pasar a través de ellas con precisión milimétrica para poder ejercer correctamente su función y lograr la parada del reactor.

Hasta la fecha, sobre un total de 97 penetraciones que tiene su vasija, 66 de ellas sufren un preocupante proceso de agrietamiento. Además, el CSN admite que el problema ha seguido empeorando "siguiendo tendencias anteriores". Por si fuera poco, el CSN reconoce además que en las últimas inspecciones realizadas en Garoña en 2003 se han detectado "nuevos defectos [grietas] localizados en zonas diferentes a las consideradas usuales". Y el problema, como han afirmado los responsables del CSN en su última comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, va a seguir empeorando inexorablemente.

El propio CSN reconoce que hay cerca de 40 de estos tubos con grietas que no se han vuelto a revisar desde principios de los años 90, por lo que es evidente que se ignora su estado real de agrietamiento. Por ello, el CSN no puede tener un patrón que determine el ritmo de evolución de las grietas, y por tanto no se puede estimar el momento en el que estas penetraciones afectadas pudieran tener problemas de inserción de las barras de control, lo que podría derivar en un accidente grave. El CSN, pues, no tiene un control real de este problema.

Esto nos devuelve a la central de Mihama-3. Viendo lo que allí ha pasado, resulta aún más inaceptable que Nuclenor, la compañía propietaria de Garoña, en su afán por reducir costes, no haya revisado en cada una de sus paradas el 100% de las penetraciones, y se limite a tan sólo unas pocas (13 de las 97 existentes en el 2003, todavía menos en ocasiones anteriores). Tampoco es admisible que el CSN se tape los ojos ante esta actitud irresponsable de Nuclenor y que, unos y otros, estén jugando a una especie de ruleta rusa con la salud pública y el medio ambiente.

Es hora de una profunda reforma legal del CSN, para hacer de este organismo uno verdaderamente independiente de la industria nuclear, a la vez que transparente y abierto a la participación pública en los asuntos nucleares. ☘

Carlos Bravo

Responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace